

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL

Soacha, Cund., dos (2) de marzo del año dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Acción de Tutela
Exped. No.	257544003002-2023-00018
Accionante	Maira Alejandra González Díaz.
Accionado	EPS Compensar y Proctomedical.
Asunto	Fallo en primera instancia

La señora **MAIRA ALEJANDRA GONZÁLEZ DÍAZ**, incoó el trámite constitucional de la referencia invocando los derechos fundamentales a la salud en conexidad a la vida digna, señalado en la Constitución Política de Colombia.

1.1. Hechos

En resumen refirió la accionante que, el día 12 de septiembre de 2022 tuvo una cita en la entidad accionada Proctomedical debido a algunos síntomas y unos exámenes programados allí; el coloproctólogo le informó que le deben realizar una cirugía para extraerle un tumor en la zona rectrorrectal.

Agregó, que al salir de la consulta le dieron órdenes (sic); se dirigió a la EPS accionada para la respectiva autorización, donde le informaron que se podía tardar un poco la programación de la cirugía, siendo probable que la operaran en enero del presente año.

El día 11 de enero de 2023, se comunicaron con ella desde la entidad accionada Proctomedical, quienes le indagaron si el médico cirujano se había comunicado con ella, pero a la fecha no había recibido comunicación alguna, además le indicaron que debida esperar, siendo esta la única comunicación recibida.

Aseguró, que se comunicó con la accionada [Proctomedical] para solicitar información de la programación de la cirugía, sin encontrar información alguna, y que, lleva 6 meses esperando el procedimiento; además de ello, el tumor está creciendo estando en riesgo su vida si no lo tratan; que, le deben realizar una biopsia para determinar si es maligno o no.

En escrito allegado el pasado 1 de marzo de 2023, informa que a la fecha la parte accionada no le ha notificado programación alguna para la realización de la cirugía ordenada.



Por lo anterior, solicitó que se protejan sus derechos fundamentales, y se ordene a la parte accionada, que proceda a programarle la cirugía y procedimientos respectivos.

1.3. Actuación procesal

La acción fue instaurada el **17 de febrero de 2023** y asignada por reparto; admitida con proveído del 20 de febrero de 2023, en el que se ordenó la notificación a las partes accionante y accionada.

La **EPS COMPENSAR**, a través de su apoderado judicial, rindió el informe requerido por el Juzgado, señalando entre otras cosas que, en punto a las pretensiones desde el proceso autorizador de esa entidad, la usuaria cuenta con las autorizaciones requeridas para el procedimiento ordenado; y que, se encuentran agotados los trámites administrativos tendientes a la materialización de la prestación del servicio desde el proceso de cirugía, solicitó con prioridad a la IPS [Clínica Palermo] la programación del procedimiento; y que, una vez alleguen las programaciones solicitadas serán notificadas a la usuaria como al Despacho.

Relató además, que resulta improcedente la acción de tutela frente a esa entidad, como quiera que su conducta se ha ajustado a las normas legales vigentes sin vulnerar derechos fundamentales de la accionante; y que, han brindado los servicios médicos, prestaciones asistenciales que ha sido requeridas por la parte actora, conforme a las coberturas del Sistema General de Seguridad Social en Salud; solicitando a continuación que se declare la improcedencia de la acción de tutela con respecto a esa entidad.

Entre tanto, la entidad **PROCTOMEDICAL**, guardó silencio ante el requerimiento efectuado por el Despacho.

CONSIDERACIONES

En su artículo 86, la Constitución Nacional consagró un instrumento para que las personas puedan reclamar del Estado, en forma preferente y sumaria, la protección inmediata de los derechos fundamentales consagrados en ella,



cuando quiera que sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en determinadas eventualidades.

Se trata de una acción subsidiaria y eventualmente accesoria, toda vez que sólo es procedente en ausencia de cualquier mecanismo ordinario para salvaguardar tales derechos “...salvo que (...) se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, lo cual tiene desarrollo en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que especifica los eventos de improcedencia.

Sobre la Naturaleza y alcance del **DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD**, el Máximo órgano Constitucional indica lo siguiente:

“...Desde hace varios años, la jurisprudencia constitucional viene reconociendo la naturaleza fundamental del derecho a la salud en virtud de su orientación a la realización de la dignidad humana y su expreso reconocimiento constitucional. Sobre este punto, esta Corporación en la sentencia C-936 de 2011[1] expresó: “A pesar de que en un comienzo la jurisprudencia no fue unánime respecto a la naturaleza del derecho a la salud, razón por la cual se valió de caminos argumentativos como el de la conexidad y el de la transmutación en derecho fundamental en los casos de sujetos de especial protección constitucional, hoy la Corte acepta la naturaleza fundamental autónoma del derecho a la salud, atendiendo, entre otros factores, a que por vía normativa y jurisprudencial se han ido definiendo sus contenidos, lo que ha permitido que se torne en una garantía subjetiva reclamable ante las instancias judiciales”.

Por tanto, la jurisprudencia constitucional ha dejado de señalar que ampara el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad personal’. En su lugar ha reconocido la ‘connotación fundamental y autónoma’ del derecho a la salud.

Al respecto, en sentencia T-227 de 2003[2], la Corte estimó que tienen el carácter de fundamental: “(i) aquellos derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”.

De acuerdo a esto, el derecho a la salud es fundamental en razón a que está dirigido a lograr la dignidad humana; asimismo su objeto ha venido siendo definido en los planes obligatorios de salud Ley 100 de 1993, y otras fuentes normativas como instrumentos del bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia constitucional, entre otras, le otorgan el carácter de derecho subjetivo.



En cuanto al ámbito de protección del derecho fundamental a la salud, la sentencia T-760 de 2008, indicó: *“el ámbito del derecho fundamental a la salud está delimitado por la dogmática constitucional, que reconoce los contenidos garantizados a las personas en virtud del mismo. El ámbito de protección, por tanto, no está delimitado por el plan obligatorio de salud. Puede existir un servicio de salud no incluido en el plan, que se requiera con necesidad y comprometa en forma grave la vida dignidad de la persona o su integridad personal”*.

En relación con el acceso a los servicios de salud que requiera el paciente, la sentencia T-760 de 2008 expuso:

“Una entidad prestadora de servicios viola el derecho a la salud de una persona cuando no autoriza un servicio que requiera, únicamente por el hecho de que no esté incluido en el plan obligatorio de servicios. Toda persona tiene el derecho constitucional a acceder a los servicios de salud que requiera con necesidad. Además, una EPS viola el derecho a la salud de una persona, cuando se le niega el acceso al servicio con base en el argumento de que la persona no ha presentado la solicitud al Comité Técnico Científico: ‘las EPS no pueden imponer como requisito de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de cargas administrativas propias de la entidad’”

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en virtud del principio a la dignidad humana, ha considerado que el estado máximo de bienestar físico, mental, social y espiritual de una persona, debe lograrse paulatinamente conforme al principio de progresividad y no regresión.

Al respecto, esta Corporación en sentencia C-599 de 1998[3] precisó:

“La consagración del derecho a la salud y la aplicación al sistema general de salud de los principios de solidaridad, universalidad e integralidad, no apareja la obligación del Estado de diseñar un sistema general de seguridad social que esté en capacidad, de una sola vez, de cubrir integralmente y en óptimas condiciones, todas las eventuales contingencias que puedan afectar la salud de cada uno de los habitantes del territorio. La universalidad significa que el servicio debe cubrir a todas las personas que habitan el territorio nacional. Sin embargo, es claro que ello se debe hacer en forma gradual y progresiva, pues tratándose de derechos prestacionales los recursos del Estado son limitados, de ahí la existencia del principio de solidaridad, sin el cual la población de bajos recursos o sin ellos no podría acceder a tales servicios”.

En síntesis, el derecho a la salud es fundamental de manera autónoma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, su contenido mínimo, así como aquellos definidos por vías normativas como la ley y la jurisprudencia son de



inmediato cumplimiento. Los demás contenidos deben irse ampliando y desarrollando paulatinamente conforme al principio de progresividad y no regresión.

2.4. PRINCIPIOS QUE GUÍAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA SALUD.

La garantía constitucional con la que cuenta toda persona para acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, contemplada en los artículos 48 y 49 la Constitución Política y los artículos 153[4] y 156[5] de la Ley 100 de 1993, implica que el servicio a la salud debe ser prestado conforme a los principios de oportunidad, eficiencia, calidad, integralidad y continuidad, entre otros.

2.4.1. Oportunidad: Significa que el usuario debe gozar de la prestación del servicio en el momento que corresponde para la recuperación satisfactoria de su estado de salud para no padecer progresivos sufrimientos. Esto quiere decir que cuando el acceso a un servicio de salud no es prestado oportunamente, se configura un acto trasgresor del derecho fundamental a la salud, por cuanto la salud puede deteriorarse considerablemente. Este principio incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para establecer un dictamen puntual de la patología que padece la persona, con el fin de asegurarle el tratamiento adecuado.

2.4.2. Eficiencia: Este principio busca que *“los trámites administrativos a los que está sujeto el paciente sean razonables, no demoren excesivamente el acceso y no impongan al interesado una carga que no le corresponde asumir”*[6].

2.4.3. Calidad: Conlleva que todas las prestaciones en salud requeridas por los pacientes, sean los tratamientos, medicamentos, cirugías o procedimientos, contribuyan notoriamente a la mejora de las condiciones de vida y salud de los mismos[7]. Quiere decir que las entidades obligadas a garantizar la prestación del servicio, no deberán suministrar medicamentos o prestar cualquier servicio médico con deficiente calidad, y que como consecuencia, agrave la salud de la persona.

2.4.4. Integralidad: El principio de integralidad ha sido postulado por la Corte Constitucional para las situaciones en las cuales, los servicios de salud requeridos son fraccionados o separados, de tal forma que la entidad responsable solo le autoriza al interesado, una parte de lo que debería recibir para recuperar su salud. Esta situación de fraccionamiento del servicio se debe por ejemplo al interés que tiene la entidad responsable en eludir un costo que a su juicio no le corresponde asumir[8].

En otras palabras, este principio predica que las entidades que participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes. Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios para ejecutar un tratamiento[9].



Sintetizando, el principio de integralidad pretende "(i) *garantizar la continuidad en la prestación del servicio* y (ii) *evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología*"[\[10\]](#).

2.4.5. Continuidad: Esta Corporación ha amparado el derecho a que a toda persona se le garantice la no interrupción de un tratamiento, una vez éste haya sido iniciado[\[11\]](#), antes de la recuperación o estabilización del paciente.[\[12\]](#)

Así, una institución encargada de prestar el servicio de salud, puede terminar la relación jurídico-formal con el paciente de acuerdo con las normas correspondientes, pero ello no implica que pueda dar por terminada inmediatamente la relación jurídica-material, en especial si a la persona se le está garantizando el acceso a un servicio de salud[\[13\]](#).

El servicio de atención médica debe prestarse en condiciones de continuidad, lo que implica también que si el tratamiento fue iniciado no podrá ser interrumpido o suspendido injustificadamente, por razones administrativas o presupuestarias, ya que constitucionalmente no es admisible interrumpir o abstenerse de prestar un tratamiento médico ya prescrito e iniciado, pues se estaría incurriendo en un desconocimiento flagrante del principio de confianza legítima[\[14\]](#).

"Este principio se fundamenta en (i) la necesidad del paciente de recibir tales servicios y en (ii) el principio de buena fe y confianza legítima que rige las actuaciones de los particulares y de las entidades públicas (...)"[\[15\]](#).

La Corte ha señalado que el paciente tiene una expectativa legítima en que las condiciones de calidades de un tratamiento prescrito, no sea interrumpido súbitamente antes de su recuperación o estabilización[\[16\]](#), o por lo menos otorgando un periodo mínimo de ajuste que le permita continuar la prestación del servicio con el mismo nivel de calidad y eficacia[\[17\]](#).

En resumen, las EPS deben garantizar que el acceso a los servicios de salud cumpla con los criterios de calidad, eficiencia, oportunidad, integralidad y continuidad; de no ser así, se transgreden de forma directa los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de salud...".

Ahora bien, en atención al derecho fundamental reclamado debe el Despacho observar además otros aspectos, como es el que tiene que ver con el **manejo de las patologías sufridas por personas que son sujetos de especial protección constitucional, como son los niños, las que se encuentran en situación de discapacidad o de la tercera edad**, respecto a lo cual ha



manifestado el máximo Tribunal Constitucional en Sentencia T-208 de 2017 que:

"...tiene mayor relevancia cuando los afectados sean sujetos de especial protección constitucional: niños, personas en situación de discapacidad o de la tercera edad, entre otros. Dicho trato diferenciado se sustenta en el inciso 3º, del artículo 13 de la Constitución Política que establece la protección por parte del Estado a las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

Para lo que interesa a la presente causa, este Tribunal ha sido enfático en destacar que el principio de integralidad del sistema de salud implica suministrar, de manera efectiva, todas las prestaciones que requieran los pacientes para mejorar su condición médica "[e]sto es, que la protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación particular de un(a) paciente", de esta forma se protege y garantiza el derecho fundamental a la salud y la adecuada prestación de los servicios médicos que permitan el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. De manera puntual, la Corte, en sentencia T-644 de 2015, destacó:

"En lo que concierne al suministro del tratamiento integral, cabe resaltar que el principio de integralidad en el acceso a los servicios de salud se exterioriza en la autorización, práctica o entrega de las tecnologías a las que una persona tiene derecho, siempre que el galeno tratante los considere necesarios para el tratamiento de sus patologías. De lo anterior se desprende que 'la atención en salud no se restringe al mero restablecimiento de las condiciones básicas de vida del paciente, sino que también implica el suministro de todo aquello que permita mantener una calidad de vida digna'.

Con todo, quienes padecen enfermedades que deterioran su salud se les debe garantizar siempre un tratamiento integral, en los términos, que se establecieron en el artículo 8º, de la Ley 1751 de 2015, de tal forma que se garantice el acceso efectivo al servicio de salud, mediante el suministro de "todos aquellos medicamentos, exámenes, procedimientos, intervenciones y terapias, entre otros, con miras a la recuperación e integración social del paciente, sin que medie obstáculo alguno independientemente de que se encuentren en el POS o no". Acceso que se exterioriza en la autorización, práctica o entrega de las tecnologías a las que una persona tiene derecho, siempre que el profesional de la salud los considere necesarios para el tratamiento de la enfermedad. En diferentes pronunciamientos esta Corporación ha reiterado esta garantía de acceso efectivo a los servicios médicos."

Sobre el **derecho al diagnóstico** ha reiterado en Sentencia T-100 de 2016, que:

"...4.3. El derecho al diagnóstico como componente del derecho a la salud, en términos de esta Corporación, implica una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos médicos que requiere. Son tres las etapas de las que está compuesto un diagnóstico efectivo, a saber: identificación, valoración y prescripción. La etapa de identificación comprende la práctica de los exámenes previos que se ordenaron con fundamento en los síntomas del paciente. Una vez se obtengan los resultados de los exámenes previos, se requiere una valoración oportuna y completa por parte de los especialistas que amerite el caso, quienes,



prescribirán los procedimientos médicos que se requieran para atender el cuadro clínico del paciente.”.

2.5. Problema Jurídico y Caso Concreto

De acuerdo a lo anterior, corresponde al Despacho establecer si las accionadas, **EPS COMPENSAR** y/o **PROCTOMEDICAL**, han vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales de la señora **MAIRA ALEJANDRA GONZÁLEZ DÍAZ**, al no autorizar y programar el procedimiento quirúrgico denominado **485003 PROCTECTOMÍA VÍA TRANS-SACRA-CLINICA PALERMO – 486101 RESECCION DE TUMOR RECTAL POR PROCTECTOMIA TRANS-SACRA O TRANS -COCCOGEA-**, conforme a la orden médica dada por el galeno tratante para el tratamiento de la patología padecida.

Al respecto, se encuentra acreditado dentro del expediente digital lo siguiente:

La señora **MAIRA ALEJANDRA GONZÁLEZ DÍAZ** se encuentra afiliada a **EPS COMPENSAR** en el régimen contributivo, y con diagnóstico C20X [Cáncer de recto] a quien desde el pasado **12 de septiembre de 2022**, el médico tratante ordenó el procedimiento quirúrgico denominado **485003 PROCTECTOMÍA VÍA TRANS-SACRA-CLINICA PALERMO – 486101 RESECCION DE TUMOR RECTAL POR PROCTECTOMIA TRANS-SACRA O TRANS -COCCOGEA**.

Al no recibir la prestación efectiva del servicio ordenado por el galeno tratante, la accionante tuvo que presentar la acción de tutela de la referencia, para su exigencia y prestación efectiva.

Para enervar las pretensiones de la accionante, dijo la E.P.S. accionada, que la usuaria cuenta con las autorizaciones requeridas para el procedimiento ordenado; y que, ha agotado todos los trámites administrativos tendientes a la materialización de la prestación del servicio desde el proceso de cirugía; y que, solicitó con prioridad a la IPS [Clínica Palermo] la programación del procedimiento. Además, refirió que una vez le alleguen las programaciones solicitadas serán notificadas, tanto a la usuaria como al Despacho.

De otro lado indica que, aun cuando se notificó en legal forma a la entidad accionada **PROCTOMEDICAL** sobre la admisión de la presente acción de tutela con el **oficio No. 0334** del 20 de febrero de 2023, a la dirección electrónica



ANGERVARRA@HOTMAIL.COM, esta guardó silencio ante el requerimiento efectuado por el Despacho, siendo consecuente aplicar la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el accionante en su escrito petitorio de amparo y que fueron debidamente acreditados dentro del presente trámite constitucional¹.

No obstante ello, se *itera* que es directamente a la EPS accionada a quien le corresponde el deber legal verificar y garantizar la efectiva prestación del servicio de salud ordenado a la accionante por intermedio de su red de prestadores conforme a las precisas órdenes dadas por su médico tratante, pues, resalta en este punto el Despacho, que a la calenda no se ha programado el procedimiento quirúrgico ordenado a la querellante, según manifestación allegada al interior del presente trámite constitucional por la accionante, **el pasado 1 de marzo del año avante.**

En ese orden, aterrizados los hechos comprobados a la normatividad y jurisprudencia citados en líneas anteriores, resulta más que evidente para el Despacho que el galeno tratante de la señora MAIRA ALEJANDRA GONZÁLEZ DÍAZ, le ordenó el procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la patología padecida, por lo que, la E.P.S. **no podía, ni puede** negarse a su prestación (con la demora se entiende su negación), pues se trata de una obligación de orden legal y su retraso pone en riesgo los derechos fundamentales de la paciente, creando una barrera que le impide acceder al servicio público de salud. Luego entonces se advierte que la E.P.S. accionada ha vulnerado los derechos fundamentales reclamados por la tutelante.

En este punto es necesario resaltar a la E.P.S accionada, que la manifestación que la usuaria cuenta con las autorizaciones requeridas para el procedimiento ordenado; y que, ha solicitado con prioridad a la IPS [Clínica Palermo] la programación del procedimiento, lo que será notificado tanto a la usuaria como al Despacho, no la excusa de la vulneración encontrada por el Juzgado, pues lo que debió verificar para la protección de los derechos fundamentales alegados,

¹ La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Art. 20 Dec-ley 2591/91] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades pública. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e inciso segundo del artículo 123 C.P.) Sentencia T-633 de 2003 MP. Jaime Córdoba Triviño.



fue su efectiva prestación. Lo anterior, ya que estas labores corresponden a cuestiones netamente administrativas de la E.P.S junto con su red prestadora, sin que dicha carga pueda trasladarse a la paciente por parte de la entidad aseguradora, quien es la obligada de prestar el servicio de salud.

Por tanto habrá de ordenarse a la **EPS COMPENSAR**, por intermedio de un fallo de tutela, **PROGRAME** a la accionante por intermedio de su red de prestadores, **si aún no lo ha hecho**, el procedimiento quirúrgico denominado: **"485003 PROCTECTOMÍA VÍA TRANS-SACRA-CLINICA PALERMO – 486101 RESECCION DE TUMOR RECTAL POR PROCTECTOMIA TRANS-SACRA O TRANS -COCCOGEA"**, ordenado por su galeno tratante para el tratamiento de la **patología catastrófica padecida**; sin imponerle trabas ni obstáculos de carácter administrativo que impidan su acceso al servicio público de salud. Ello atendiendo los principios de inmediatez, prontitud, sin ninguna dilación, y en la forma, especificación y cantidad prescrita en la respectiva orden de servicio.

Es preciso resaltar, que el tratamiento integral **no conlleva la protección de hechos futuros e inciertos**, sino que tal como lo ha manifestado la H. Corte Constitucional, implica garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y evitar que los ciudadanos interpongan acciones constitucionales, con el fin de conseguir protección a sus derechos fundamentales que puedan ser vulnerados, por cada prescripción de servicios negados por la entidad prestadora de salud.

Es por ello, que además corresponde a este Despacho Constitucional prevenir a la E.P.S. accionada para que, en lo sucesivo, garantice a la accionante un tratamiento continuo frente las varias condiciones que genera la **patología catastrófica padecida**, la que goza de protección especial por parte del Estado, garantizando las prestación efectiva de todos los servicios de salud ordenados por su médico tratante tales como: medicamentos, procedimientos, insumos y demás, sin dilación, ni la imposición de cargas administrativas injustificadas, y de acuerdo a las prescripciones efectuadas por este.

Desde luego que, de llegarse a generar costos adicionales o excluidos del PBS en razón al tratamiento, podrá la E.P.S. accionada efectuar el recobro ante el ente respectivo, para lo cual deberá acogerse a los parámetros legalmente establecidos para ese fin. Y, aun cuando se llegue a requerir que deba



concederse la facultad de recobro de forma expresa en el presente fallo, no debe así procederse, pues debe tenerse en cuenta que es un aspecto ajeno a la finalidad de la acción de tutela, y que, sólo se materializa para satisfacer un requisito reglamentario de carácter formal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacha-Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER LA TUTELA AL DERECHO FUNDAMENTAL a la salud, en conexidad a la vida digna, a la señora **MAIRA ALEJANDRA GONZÁLEZ DÍAZ**, vulnerados por la **EPS COMPENSAR**.

SEGUNDO: ORDENAR a la **EPS COMPENSAR**, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, *si no lo ha hecho*, **PROGRAME** el procedimiento quirúrgico denominado: **"485003 PROCTECTOMÍA VÍA TRANS-SACRA-CLINICA PALERMO - 486101 RESECCION DE TUMOR RECTAL POR PROCTECTOMIA TRANS-SACRA O TRANS -COCCOGEA"**, ordenado por médico tratante para el tratamiento de su patología; sin imponerle trabas ni obstáculos de carácter administrativo que impidan su acceso al servicio público de salud. Ello atendiendo los principios de inmediatez, prontitud, sin ninguna dilación, y en la forma, especificación y cantidad prescrita en la respectiva orden de servicio.

TERCERO: ADVERTIR a la **EPS COMPENSAR**. que, de ser el caso, podrá recobrar ante la entidad respectiva el monto que tenga derecho a repetir por la prestación de los servicios, que de acuerdo a la normatividad vigente no les corresponda asumir, y **PREVENIRLA** sobre la obligación que legalmente le asiste de garantizar la prestación integral de los servicios de salud conforme a la **patología catastrófica padecida** por la accionante, requeridos con la debida observancia de los principios y normas que regulan el servicio público de salud, sin que tenga que acudir al uso de la acción de tutela.



CUARTO: NOTIFÍQUESE de esta decisión a las partes.

QUINTO: En el evento de que no sea impugnada esta decisión, para su eventual revisión remítase la actuación a la Honorable Corte Constitucional.

Notifíquese y cúmplase.

EL Juez,

RAFAEL NÚÑEZ ARIAS

Firmado Por:

Rafael Nunez Arias

Juez Municipal

Juzgado Municipal

Civil 002

Soacha - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **aac95fa3d11b66eb035d0656086b6830e95a83149e7c4e7d7fc842a6f2736594**

Documento generado en 03/03/2023 10:59:50 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>